

VENEZUELA. REGIONES ENTRE LA GLOBALIZACION Y LA CRISIS

Carlos A. Muñoz L. (*)

Esta ponencia intenta una reflexión acerca de algunas implicaciones de la globalización en las regiones de Venezuela. En rigor no se trata sólo de las imbricaciones de ésta y las geoeconomías regionales, sino también de la crisis económica que se prolonga por casi dos décadas consecutivas. Crisis que si bien responde a factores internos, no es menos cierto que, en buena medida, se entrelaza con procesos y tendencias mundiales.

Para realizar algunas consideraciones sobre estos temas para el caso de Venezuela se precisa bosquejar los principales rasgos de la evolución de la economía en general, así como de la de los sectores más importantes. A partir de éstos se intentará inferir los concomitantes territoriales en los ámbitos regionales. Las conexiones entre hechos y tendencias de la economía general y sectorial y sus expresiones en las geoeconomías regionales, se harán sobre la base de información muy variada: artículos de prensa y revistas, datos cualitativos e información de algunos organismos tanto públicos como privados. Ante la insuficiencia y discontinuidad de estadísticas económicas y sociales regionalizadas, las inferencias que se planteen a este nivel deben tomarse como conjeturas iniciales que requerirán de mayores indagaciones ulteriores.

Para el tratamiento de la temática se realizarán breves consideraciones sobre el proceso de globalización, luego se hará una síntesis de la evolución económica del país en las dos últimas décadas, asomando algunos efectos que ella ha tenido para posteriormente realizar un análisis de los cambios ocurridos, o en desarrollo, en los sectores de la economía venezolana más relevantes para la temática bajo estudio, tratando de inferir en cada caso, cuáles han sido las concomitancias regionales más significativas. Así mismo, se ensayará un boceto de algunas transformaciones en la configuración de los territorios regionales que se han venido perfilando.

No cabe duda que la globalización es un proceso que se viene gestando, en todos los ámbitos desde un pasado tan remoto como la perspectiva con que se le observe así lo aconseje. No obstante, algunas de sus manifestaciones más recientes han puesto en evidencia que los tiempos ya no son los de antes. Algunos cambios hacia la producción más flexible (postfordista), la amplia movilidad del capital y especialmente los rápidos desplazamientos del capital financiero especulativo así lo confirman^{1/}. También, es un signo de los tiempos recientes las fusiones de grandes empresas que dan paso a las megacorporaciones entre las más conocidas, se encuentran las de la banca internacional, y del sector petrolero y las compañías de medios. De igual modo, resulta un signo de estos tiempos la magnitud y cobertura que adquieren las crisis económicas, como por ejemplo la de la deuda Latinoamericana cuya máxima expresión tuvo lugar en 1982 y que conmovió al sistema en su conjunto.

En otro ámbito, ha venido ocurriendo un cambio en la percepción y conciencia de los problemas de vivir en el **globo** terrestre que se ha materializado en una serie de documentos que, a partir de la divulgación del informe del Club de Roma, en los años setenta, advierten cómo acciones parciales en uno o más lugares afectan el sistema-mundo^{2/}

No es necesario extenderse en la ampliamente conocida revolución científico-técnica y sus diversos impactos en los más variados ámbitos de la vida humana. Sólo resta recalcar que recientemente su significación y amplitud cada vez más global está incluyendo a los países y ámbitos más rezagados, aunque a distancia aún considerable en término de cobertura poblacional y aplicaciones, las cuales constante y rápidamente se acrecientan en los países industrializados.

Aparentemente Venezuela habría estado demasiado sumida en la crisis económica interna como para reaccionar frente a las tendencias de la globalización. No obstante, la crisis de la deuda acentúa la tendencia declinante que venía originándose en el modelo económico rentista impulsado durante las últimas décadas.

En el contexto latinoamericano, durante las cuatro últimas décadas, la economía venezolana transitó de una situación de primacía a otra de claro retraso. Este cambio obedece a múltiples factores tanto internos como externos. Se trata de un largo y extenso proceso no exento de paradojas. Aunque en este trabajo sólo se intenta hacer referencia a los últimos veinte años, es conveniente ubicar, de tanto en tanto, el asunto en una perspectiva más amplia. De este modo la economía ha experimentado un ciclo en el que se pueden distinguir tres fases.

Instituto de Geografía. Universidad de Los Andes.
Mérida – Venezuela

Una primera fase de estabilidad y crecimiento económico cuyo término puede ubicarse a mediados de los años setenta. Los indicadores macroeconómicos de Venezuela la ubican en una situación atípica si se le

compara con los países de América Latina y el Caribe. Una paridad cambiaria sostenida y favorable, inflación baja (un dígito bajo), un ingreso per cápita superior al de los países de la región. (Bello R., O. 1999)^{3/}.

El modelo de economía rentista posibilitó esa prolongada fase, durante la cuál se vienen incubando los elementos que terminarán con el colapso del modelo. Entre otros, tales factores se relacionan con: la insuficiencia para generar empleos al ritmo en que se incrementaba la fuerza laboral; y la incapacidad del sector privado para generar inversiones propias e independientes del volumen alcanzado por la renta petrolera y del modo como el Estado la distribuye^{4/}.

Una segunda fase de crisis que puede ubicarse entre mediados de los setenta y fines de los ochenta. Durante esta fase la mayoría de los índices macroeconómicos experimentan un sostenido deterioro y colocan a Venezuela en una situación similar a la de las economías de muchas de las naciones latinoamericanas y entre los quince países más endeudados del mundo.

Una tercera fase en la cual la economía venezolana se queda y retrocede, precedida por un largo periodo de aplicación de un sistema proteccionista de controles que estaba postrado y cuyos signos más notorios eran: un gran déficit fiscal, tasas de interés inferiores al índice inflacionario y una paridad cambiaria que se hacía insostenible frente a la ingente fuga de divisas. En este contexto Venezuela cambia su modelo económico de estilo nekeynesiano, mantenido por largo tiempo, y adopta medidas de corte neoliberal, en 1989 (Maza Zabala, D. F. 1999), las cuales consisten en un *programa de ajuste estructural*. Este programa se mantiene hasta febrero de 1994, imponiéndose nuevamente regulaciones, restricciones y controles relativos, por parte del Estado. En parte, esta marcha atrás responde a la orientación política del nuevo gobierno que asume en ese momento, como asimismo a una estrategia para enfrentar la grave crisis financiera que se extendió por dos años. A partir de abril de 1996 se retoma la política de liberación y apertura económica, bajo la tutela del FMI y BM. El actual gobierno, del Presidente H. Chávez, en cierto modo mantiene, con variantes, esa política haciendo esfuerzos por atenuar el costo social que ella implica. Venezuela, a pesar de mantener una política moderada de apertura a la inversión extranjera continúa siendo una economía controlada.

Con relación a las dos últimas décadas, que interesan aquí, se puede puntualizar que: los índices económicos y sociales salvo excepciones muestran desde 1982 y más nítidamente desde 1983 una secuencia de *cifras en rojo* (Sanoja Hernandez, J. 1999: 29). Los años ochenta estuvieron signados por la deuda, situación generalizada en América Latina y la corrupción mayormente expresada en Venezuela por el sistema de control de cambio (RECADI) (loc. cit.).

La puesta en vigencia de un nuevo esquema cambiario en 1983 junto a otros factores estructurales, estimuló el creciente endeudamiento en los ochenta (Fajardo, V. 1986: 171). En el año mencionado culmina un largo período de una paridad cambiaria muy favorable con libre convertibilidad. Así se pasa de 4,30 bolívares por dólar a otro de 7,50 para las importaciones y se aplica un control de cambio. En los años siguientes, este proceso de devaluación continuó, así para 1988 ya alcanzaba los 15,2: en 1989 se eleva a 46,2 y el proceso de depreciación del bolívar continúa aceleradamente hasta fecha reciente en que se le deja fluctuar (microdevaluaciones) en un sistema de bandas. Para octubre de 2000 alcanzaba 692 bolívares por dólar.

En los años noventa se profundiza la crisis manifestándose en unos niveles inflacionarios y de devaluación del bolívar sin precedentes en la historia nacional. Hechos que se interrelacionan con una caída del salario real y con una acentuación de los grados de desigualdad, situación que, aunque común a varios países de América Latina, ubica a Venezuela entre las naciones de mayor desigualdad en la región. (Baptista, A. 1999b: 35). En los últimos quince años el avance de la pobreza ha sido considerable (España, L., 1997).

En consecuencia, en los años ochenta, ocurre un cambio drástico en el entorno en el que se venían desarrollando las distintas actividades económicas y las geoeconomías regionales. Este cambio se caracteriza por una disminución de la inversión pública y de la capacidad del estado para continuar financiando la inversión privada. Situación ésta que se deriva de la caída de los precios del petróleo y del impacto de la crisis de la deuda externa y que se manifiesta, claramente, entre otros hechos, en las sucesivas devaluaciones del bolívar.

La reducción tanto la capacidad del Estado para realizar inversiones directas como para financiar las del sector privado, tal como lo había venido haciendo en el pasado, tuvo como consecuencia una considerable reducción del dinamismo de la economía. Proceso con el cual se habrían visto resentidos todos los estratos empresariales, aparentemente, en menor grado los grupos más importantes.

Para enfrentar la crisis se elabora y se aplica un *programa de ajuste estructural* a comienzos de 1989, que se caracteriza por la eliminación de la intervención estatal, disminución de los ya menguados subsidios, liberación de controles de precios e inicio de una apertura comercial. Con lo cual el entorno económico de los años noventa se complejiza aún más y se le incorporan más nítidamente elementos propios de la globalización económica. Este programa acentúa aún más los cambios habidos en la década anterior e introduce nuevos. Obliga a los empresarios a competir; situación ésta para la cual la mayoría no se encontraban preparados.

La crisis que viene afectando el aparato productivo venezolano, en las dos últimas décadas se manifiesta, entre otros aspectos, en una tendencia a la declinación del producto interno bruto especialmente el no petrolero. Todos estos hechos reseñados repercuten, con mayor o menor intensidad, en las más variadas dimensiones de la vida económica y social y se expresan heterogéneamente en los respectivos correlatos de las geoconomías regionales.

En los estados con mayor predominio de la actividad agropecuaria, especialmente la agrícola y en los que ésta representa una actividad importante de su base económica, los empresarios con mayores recursos o ventajas productivas han resistido las sucesivas devaluaciones, especialmente las macro. Ésta han incidido en la elevación de costos de producción, por la alta proporción que alcanza el componente importado en la producción agrícola. También esta actividad ha sido vigorosamente sacudida por la reducción sucesiva del crédito público.

Los altos intereses que ha predominado en la banca comercial privada, aún cuando se han otorgado algunas concesiones, junto a las garantías que ella exige habría conducido a que mayormente los grandes productores hayan sido los que lograron acceso a dicho financiamiento. En consecuencia, los medianos y pequeños agricultores, los menos favorecidos, han venido replegándose o incluso se han incorporado a la fuerza de trabajo, vendiendo o abandonando, temporal o definitivamente sus explotaciones. De este modo, se habría tendido a acentuar la concentración de la propiedad agrícola^{5/}.

Con el programa de ajuste estructural de 1989 la agricultura fue nuevamente afectada especialmente por que la liberación comercial, la sometió contexto de mayor competencia en un mercado interno ya reducido por el alza de los precios de los productos y la disminución del salario real. El retorno temporal a las políticas proteccionistas (02/94-05/96) además de breve fue poco efectivo debido a las limitaciones que imponían los nuevos acuerdos internacionales y la legislación que regulaba las transacciones comerciales. La contracción de la agricultura fue mayor en los primeros momentos de aplicación del programa de ajuste macroeconómico 89-93. Los incrementos en los costos fueron cuantiosos, lo que hizo muy difícil competir con una agricultura directamente subsidiada como la de muchos países industrializados.

Desde un punto de vista estrictamente económico los cambios sufridos por este sector en los noventa han estimulado la productividad ya que ésta se incrementó en un 50%, según el Banco Mundial (Hidalgo, E. 1999: 53). Algunos cultivos claves como arroz, maíz, hortalizas, frutas y tubérculos alcanzaron los estándares más altos durante el período. No obstante, dicha productividad continúa siendo una de las más bajas de la región y a pesar de que las exportaciones crecieron, el país continuó siendo un exportador bastante modesto (op. cit.).

La agricultura ha mantenido un aporte cercano a un cinco por ciento del PIB, proporciona la mayor cantidad de puestos de trabajo, alrededor del nueve por ciento del empleo total con una desocupación baja que ha fluctuado entre 3,9% y 5,5% en el período. Es probable que las fluctuaciones en el empleo agrícola hayan sido influidas tanto por la contracción de los mercados, como por mejoras en la eficiencia, produciéndose, tal vez, un desplazamiento de mano de obra hacia otras actividades, incluso de carácter más urbano.

Dado que la actividad agrícola se desarrolla en territorios relativamente extensos las variaciones en dicha actividad han afectado diferencialmente una gran cantidad de centros poblados y asentamientos de varias regiones del país. En el largo plazo algunas regiones parecen permanecer estancadas. No obstante, otras, vía mejoras tecnológicas, habrían experimentado un incremento en la productividad, incluyendo aumentos en la producción con una relativa leve disminución de las superficies utilizadas^{6/}. En algunos estados como por ejemplo, Guárico y Portuguesa habría ocurrido esto con mayor intensidad, en ciertos renglones como maíz, arroz y en menor medida sorgo. Todo lo cual debe haber influido en la base económica de las ciudades llaneras como Calabozo, San Juan de los Morros, Acarigua-Araure y también Barinas.

La persistencia, con altibajos, de la actividad agrícola en otros renglones tales como la caña de azúcar, frutales y la misma actividad pecuaria ha contribuido a mantener e incluso estimular la economía de ciudades y centros urbanos de los estados Yaracuy, Lara, Apure y Sur del Lago de Maracaibo. El cacao recientemente ha recibido estímulo de la inversión nacional y extranjera, lo cual estaría afectado dicha

actividad en zonas específicas de los estados Sucre, Miranda, Aragua y Sur del Lago de Maracaibo, en los estados Mérida y Zulia.

El mejoramiento de la productividad en hortalizas y tubérculos ha beneficiado a grandes y medianos productores de los estados Trujillo, Táchira y Mérida así como también, en áreas donde se desarrollan estos cultivos en los estados Portuguesa, Lara, Falcón.

En más de una ocasión, muchos renglones de la producción agrícola se han visto afectados por la competencia de las importaciones de esos mismos productos, especialmente por la apertura comercial de los años noventa. De este modo, los productores de maíz, de algunas oleaginosas y de papa, entre otros, recurrentemente han reclamado la protección del gobierno pidiendo prioridad para la colocación de la producción nacional en el mercado interno.

Por otra parte, la actividad petrolera en Venezuela es y ha sido de vital importancia en la medida en que genera la mayor parte de los ingresos fiscales, entre ellos los provenientes de la renta. Esta última ha constituido, en alto grado, el elemento dinamizador del resto de la actividad económica y en torno a su uso y distribución gira la vida sociopolítica de la nación.

La política petrolera ha ido evolucionando desde la nacionalización de esta industria en 1976 hasta ahora. De este modo, se pasa de una concepción que, ante el inminente agotamiento de la actividad, se orientaba más hacia cómo diversificar e independizar el resto de la economía del petróleo, a otra que, no excluyendo la anterior, pone énfasis en la ampliación y diversificación de la industria petrolera teniendo en vista las potencialidades que han sido detectadas, en los últimos años. Esto ha conducido finalmente a la política de la **apertura petrolera**. Política que, en sus distintas modalidades, ha continuado en los años recientes, con el actual gobierno. Se trata de la búsqueda de inversión, nacional o extranjera, adicional a la que tiene prevista la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) para ampliar y diversificar la producción de hidrocarburos livianos, pesados, extrapesados y gas natural.

Esta apertura parece ser la resultante de una serie de cambios que se vienen desarrollando desde la nacionalización petrolera. En aquella ocasión la empresa petrolera estatal recibe una industria con reservas limitadas de hidrocarburos, operando intensivamente y con quince años en los cuales no se había realizado nuevas inversiones, incluso en algunos casos se había producido desinversión. Una de las estrategias llevadas a cabo desde entonces, consistió en mantener o acrecentar los ingresos petroleros, para lo cual se recurrió al manejo de las cuotas de producción y de los precios. En esta oportunidad, la OPEP representaba una organización adecuada.

En el ínterin el cambio en el enfoque y la estrategia se entrelaza y es consecuencia de dos conjuntos de hechos significativos: por una parte, los planes de exploración, además de incorporar tecnología, condujeron a determinar la existencia de cuantiosas reservas de crudos convencionales, pesados, extrapesados y gas natural y, por la otra, la internacionalización de la empresa PDVSA mediante un programa sistemático de adquisición total o parcial de terminales, refinerías y redes de distribución. Esto ha conducido a que esta corporación ocupe una posición relevante en el contexto internacional y en cierto momento llegara a tener un peso importante en las decisiones económicas del país.

Fuera de los planes de modernización, exploración y expansión llevados a cabo por la industria, los cambios más importantes ocurren con la reforma fiscal de 1991 tendente a reducir el impuesto sobre la renta de cerca del 68% al 34%, para estimular el desarrollo de proyectos de explotación de crudos extrapesados y de gas natural costa afuera. La reducción gradual del valor fiscal de exportación en 1993 permitió a este sector emprender una expansión sin recurrir a mayores endeudamientos (Espinasa, R. 1997: 537).

Como se indicó anteriormente, paralela y concatenadamente se fue produciendo una transformación en la concepción de la relación de la actividad petrolera con la economía del país. Es así como se ha transitado desde una noción de maximizar la renta petrolera ante la inminente declinación de la actividad y agotamiento de las reservas a otra, cuyo eje se orienta hacia el desarrollo de las cuantiosas reservas maximizando el valor agregado y los impactos sobre la economía nacional (Espinasa, R. op. cit. 538).

Desde la perspectiva de los impactos territoriales y regionales lo más significativo en la actividad petrolera comienza a darse en los inicios de los noventa, primero con los planes de ampliación de la capacidad de producción y luego con la apertura petrolera.

La apertura petrolera busca tener acceso a financiamiento, tecnología y mercados ampliando la capacidad operativa de PDVSA. También se persigue estimular la competencia e incrementar la eficiencia del sector petrolero nacional (ibid). La apertura se desarrolla a través de tres modalidades: a) Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.

Según informaciones de la propia Corporación hacia fines de 1999 existían treinta y tres campos reactivados bajo la figura de convenios operativos. Cuatro Asociaciones Estratégicas están desarrollando actividades, en la Faja Petrolífera del Orinoco que estarán en producción entre fines del 2000 y 2004 y ocho áreas están siendo exploradas a riesgo por empresas privadas y de resultar económicamente rentables podrán ser desarrolladas bajo la figura de ganancias compartidas.

Los efectos más generales de la actividad petrolera se relacionan con la utilización de un alto porcentaje de servicios ingenieriles de origen nacional. Así mismo la mitad de los materiales y equipos también tienen igual origen y es factible desarrollar ese sector hasta suplir el 80% de la demanda (Espinasa, R. 1997:540). También es posible desarrollar la producción de insumos para la actividad petrolera. Finalmente, los proyectos en desarrollo, sin considerar los de la explotación de gas natural, contemplan, de manera preliminar, una inversión estimada superior a los 20.000 millones de dólares.

De este modo la apertura petrolera a través de los llamados Convenios Operativos se orienta a la reactivación de campos petroleros maduros. Hasta fines de 1999, se habían asignado treinta y tres (33) campos con una inversión acumulada de 1.900 millones de dólares⁶⁷.

El impacto territorial de los treinta y tres campos desarrollados bajo esta modalidad significa que áreas petroleras en declinación o incluso inproductivas recuperen su dinamismo económico, generando nuevos puestos de trabajo, reintegrando mano de obra desplazada por anteriores reestructuraciones de la empresa o incluso en algunos casos incorporando nuevos trabajadores a esta actividad. En este sentido esta reanudación implica para muchas zonas del país la estabilización de la población en sus lugares, la mejora en el nivel de ingresos, el incremento del empleo directo e indirecto. En otro plano, significa la recuperación de infraestructura y equipamiento y, eventualmente, nuevas construcciones.

Las entidades federales más favorecidas por esta modalidad son mayormente las que tradicionalmente han tenido un predominio en la explotación petrolera, en orden descendente del número de convenios se encuentran los estados Zulia, Anzoátegui y Monagas, le siguen a cierta distancia los estado Falcón, Guárico y Delta Amacuro.

La apertura a través de las asociaciones estratégicas se orienta a la explotación de los crudos pesados, extrapesados y bitumen de la faja petrolífera del Orinoco⁷², actualmente se encuentran, en distintos grados de desarrollo cuatro asociaciones estratégicas: Petrozuata (Conoco y PDVSA), Cerro negro (Exxon Mobil, Veba Oel y PDVSA), Sincor (TotalFinalElf, Statoil y PDVSA) y Hamaca (Phillips, Texaco y PDVSA). Estas cuatro empresas, ubicadas al sur de Anzoátegui están y continuaran por algún tiempo produciendo efectos en la configuración espacial de dicha entidad federal.

Si bien es cierto ya existían allí establecimientos orientados a la exploración no es menos cierto que las nuevas instalaciones con fines de explotación comercial han atraído a una gran cantidad de mano de obra en la etapa de construcción y acondicionamiento de las instalaciones y de la infraestructura necesaria. Parte importante de dicha mano de obra, no incorporada por la puesta en producción, presumiblemente se quedará en los centros poblados cercanos y se incorporará a actividades indirectas cuando las empresas comiencen a operar sus instalaciones. En este caso el empleo directo en términos locales tendrá seguramente un efecto importante. Más significativos pueden resultar los efectos de los ingresos percibidos por los trabajadores petroleros, debido a que los niveles de remuneración en dicho sector son más altos que en el resto de las actividades económicas. En este caso, la impronta territorial de estos proyectos será más significativa por tratarse de espacios con baja densidad de población y escasa actividad económica.

Finalmente la apertura petrolera contempla otra modalidad denominada Exploración a Riesgo y la Explotación de Ganancias Compartidas, que consiste en dejar a empresas privadas el riesgo que lleva la exploración de nuevas áreas y en caso de que se descubran yacimientos explotables y económicamente rentables se conforma una empresa en conjunto con PDVSA para su explotación compartiendo los beneficios obtenidos.

Hasta ahora se han establecido ocho convenios de exploración La Ceiba, al sur del Lago de Maracaibo en jurisdicción del estado Trujillo, Guanare en el estado Portuguesa, San Carlos en el estado Cojedes, Delta centro y Punta pescador estado Delta Amacuro, Guarapiche, Paria Oeste y Paria Este, en el extremo nororiental del país. Por tratarse de proyectos cuya eventual explotación rebasa el mediano plazo sus efectos territoriales son menguados por el momento. No obstante, en algunos casos, estas actividades han significado el reacondicionamiento de infraestructura y servicios, cuya inversión, si bien pequeña para

la magnitud de los proyectos de exploración, resulta significativa si se la compara con los montos disponibles para esos efectos, en el ámbito local o estatal.

En síntesis, los proyectos en desarrollo, al consolidarse otros y prosperar, en el mediano plazo, los que están en perspectiva afianzarán, sin duda, las tendencias migratorias de la población y de cambio en configuración territorial y regional del país.

En el sector no petrolero destaca la industria, la cual ha tendido a una localización más específica y concentrada. El proceso de industrialización ha estado estrechamente vinculado con el crecimiento de centros urbanos y áreas metropolitanas. De este modo, el conocimiento de la situación y tendencia de la actividad industrial posibilita, en alto grado, vislumbrar algunas repercusiones y cambios en dichos territorios y regiones más urbanizados.

La etapa más intensa del proceso de industrialización venezolano fue promocionada a través de una serie de incentivos derivados de la política de *sustitución de importaciones*, oficializada en la década de los sesenta. De esta manera, la actividad contó con créditos en condiciones y tasa preferenciales, exenciones tributarias para la importación de bienes de capital e insumos, junto a liberación de impuestos nacionales y municipales, durante un cierto período. Así mismo, se facilitó la localización con la dotación de infraestructura construida ex profeso, tanto por parte del gobierno nacional como por la de algunos de los estatales e incluso municipales. Al mismo tiempo se adoptó la política de *compre venezolano*, la cual es reactualizada cada vez que se quiere reactivar la economía nacional.

Este conjunto de acciones proporcionó una amplia gama de oportunidades para el desarrollo de industrias en el país. En este ambiente tan favorable se instalaron un buen número de industrias lo que atrajo también a empresas multinacionales. Estas últimas tuvieron que asociarse al capital venezolano o emigrar a raíz de la firma del Acuerdo de Cartagena en 1973, el cual limitaba la inversión extranjera (Francés, A. 1997: 543).

Con esta infinidad de ventajas muchas empresas se crearon a partir de un capital inicial muy pequeño, todo lo cual generó un intrincado mecanismo de interrelaciones entre empresarios ejecutivos, personeros de la administración pública y políticos. Estas relaciones fueron muchas veces más importantes para el éxito de las empresas que la búsqueda de la eficiencia y la calidad. Además, el relativo poco número de empresas en cada rama de actividad junto al restringido mercado interno ha impulsado el monopolio y oligopolio en el sector industrial. (loc. cit.)

Como ya se puntualizó antes, las condiciones en las cuales se desenvolvía la actividad industrial y en general la empresarial, cambian radicalmente en los años ochenta. Esta situación, junto a otros factores, generó incertidumbre en el empresariado; el cual, en vez de invertir, prefirió colocar sus recursos financieros en el exterior.

Sin embargo, todavía para 1989 el arancel medio para productos importados que competían con los manufacturados en el país superaba el 60%. Además, estaba prohibida o reservada al Estado la importación de otro número de productos (op. cit.).

Adicionalmente las sucesivas devaluaciones encarecieron las materias primas y otros insumos dada la importancia del componente importado que aún mantienen algunas ramas industriales. Lo cual unido a la disminución del consumo interno originó una declinación importante en el sector.

En los noventa la liberación de las tasas de interés, junto a la disminución del crédito de las instituciones del sector público encareció el costo del financiamiento, lo cual debe haber afectado a las empresas medianas y pequeñas, con menos activos para respaldar sus solicitudes de crédito ante la banca comercial privada.

La tendencia permanente a una cierta sobrevaloración del bolívar, reclamada por algunos sectores empresariales, habría representado un desestímulo a las exportaciones del sector y, a su vez, un incentivo a las importaciones, ya que aumenta el costo de unas y disminuye el de las otras. Todo lo cual unido a la liberación comercial del programa de ajuste macroeconómico de 1989, mermó inicialmente la competitividad tanto en el mercado interno, como en el externo y explicarían un mayor estancamiento del sector.

A lo anterior se agrega una mayor competencia tanto interna como externa, derivada de los procesos de integración económica así como de los acuerdos comerciales que, aunque con retrocesos momentáneos, se mantienen vigentes. Tales convenios fueron aupados y aprovechados por reducidos sectores que vieron eventuales o reales beneficios y resistidos por muchos que visualizaron o efectivamente estaban amenazados por la competencia que se derivaba de la plena puesta en vigencia de éstos. Este *nacionalismo económico* fue y es esgrimido no sólo por sectores venezolanos, sino por muchos otros de

varios países de la región. El sucesivo relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una muestra de éste.

Los avatares del sector industrial quedan reflejados en la información del Banco Central de Venezuela. El crecimiento del PIB de la manufactura, en valor constante se incrementó apenas en alrededor del 1%, en promedio anual durante los ochenta y prácticamente se estancó en los noventa.

En el periodo 1980-1997, el número de establecimientos industriales experimentó un decrecimiento de casi el 3%, pero fue más significativo el descenso en los dos estratos intermedios (de 21 a 100 trabajadores) que en conjunto alcanzó alrededor del 21% de los establecimientos^{8/}.

Esta situación podría tener una explicación en el hecho de que la industria de tamaño medio resultó más vulnerable frente a la disminución de crédito público y a la mayor competencia, ya que tiene menos posibilidades de acceder a créditos de la banca privada debido a lo reducido de sus activos. También, la información disponible parece indicar que mientras la productividad del trabajo en la gran industria se incrementó, en los otros estratos de tamaño disminuyó, junto a esto el sector industrial ha experimentado una disminución en el uso de la capacidad instalada que según ciertas fuentes, en sus momentos más críticos habría alcanzado hasta el 50%.

Las consecuencias de esta recesión de la industria paradójicamente parecen haber sido menores en las entidades federales y regiones con mayor peso en el sector; probablemente la misma importancia de la industria vía los mayores salarios habría atenuando, un tanto, la declinación de otras actividades y con ello la recesión de los mercados habría sido menos abrupta y menos acentuada que en otras regiones. De este modo, la región capital, y seguramente los estados Aragua y Carabobo, dentro de la región central, fueron las entidades menos afectadas. En cambio es probable que los efectos fueran más acentuados en las entidades del interior: Falcón y Lara, en la región centro-occidental y Bolívar, en la de Guayana. También es posible que la disminución de los establecimientos de las industrias de tamaño medio haya sido mayor en estas entidades por lo reducido de los mercados locales y regionales, tendiendo a agravar aún más la crisis en muchas de ellas. Estos efectos guardan relación con el ascenso del desempleo, con el consecuente incremento y movilidad hacia la economía informal y con la agudización de la pobreza en general.

Efectivamente, una de las manifestaciones más notables del proceso venezolano de los últimos años ha sido la caída del ingreso real per cápita y su distribución cada vez más regresiva. Situación que se traduce además en un incremento de la brecha entre las regiones prósperas y las restantes. Entre 1991 y 1996 todas las entidades federales experimentan una disminución en el valor del índice de desarrollo humano (IDH). En 1991 once entidades federales tenían un IDH alto, en 1996 sólo dos conservan esta categoría, las que integran la región Capital (Distrito Federal y el estado Miranda). OCEI – PNUD, 1997) El descenso en este índice se explica primaria y mayoritariamente por la disminución de ingreso real per cápita y secundariamente por la declinación moderada del componente *logro educativo* (loc. cit.) Esta declinación del IDH se observa entre los años 92 y 93. En este sentido, *se puede afirmar que las remuneraciones en la ciudad de Caracas han logrado mejorar sus ingresos nominales por encima de lo logrado en promedio por todo el país; mientras que en el resto de las grandes ciudades (...) (sean del oriente o del occidente) el deterioro ha sido sistemático en todos los estratos.* (España, L. P. 1997: 481)

Se sostiene que la globalización de la economía requiere, entre otras, dos condiciones importantes para su realización; una de ellas es el desarrollo de las comunicaciones con tecnología de punta y la otra es la cantidad y calidad de los servicios prestados a las empresas.

Las telecomunicaciones es el sector no petrolero que mayor dinamismo ha mostrado durante la última década. Desde la privatización de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV) en 1991, la inversión privada ha ido incrementándose notablemente. La inversión en 1992 alcanzaba a 13,1 millardos de bolívares y en 1993 subió a 878,3 millardos, en los años siguientes se reduce y presenta variaciones. Importante resulta la del año 1995 (en que se vuelve al control de cambio) para luego incrementarse, aunque nunca a los niveles de los años 93 y 94. En el primer semestre del dos mil mientras el crecimiento del PIB continua presentando signo negativo el PIB del sector telecomunicaciones ha experimentado un incremento del 8,4%. Adicionalmente, se espera un repunte de la inversión con la apertura de las telecomunicaciones a partir de noviembre del año 2000, fecha en que finaliza el monopolio mantenido por CANTV (CUAURO, Lisbeth. 1999:59).

Al comienzo de este periodo la inversión se orientó hacia la red básica de telefonía y luego hacia el desarrollo de la telefonía móvil celular, Internet y servicios satelitales. Resulta lógico pensar que ese dinamismo de las telecomunicaciones ha ocurrido primero y más intensamente en las entidades federales más urbanizadas, vale decir en los principales centros urbanos del país, que a su vez representan las mayores áreas de mercado.

Desde esta perspectiva no cabe duda que las entidades y regiones mejor preparadas son las que tradicionalmente han venido desarrollando este tipo de servicios, es así como en 1990 el Distrito Federal y el estado Miranda (que conforman la región capital) generaban el 51% del producto interno bruto de este servicio y si se le agregan los estados Aragua y Carabobo se llega a ser del 62% de dicho producto. Este conjunto de entidades federales, conocido como la *región centro norte-costera*, también concentraba el mayor peso en la generación del PIB en servicios prestados a las empresas contribuyendo con más de un tercio del mismo, exhibiendo además el 58% del producto manufacturero⁹. Dentro de esta región se encuentran tres de las ciudades más importantes, en orden de mayor a menor tamaño poblacional: Caracas, Valencia y Maracay, junto a ellas existen una serie de centros urbanos importantes donde se localizan un número significativo de industrias.

Fuera de esta región, otras ciudades importantes son: Maracaibo, en el occidente; Barcelona-Puerto La Cruz, al oriente, seguida de Barquisimeto en el centro-occidente; Bolívar, en Guayana y a cierta distancia, con relación a estos indicadores, San Cristóbal en Los Andes. Esta última ciudad cumple un papel importante en la frontera con Colombia, una de las más activas entre ambos países.

En un estudio sobre el grado de atracción de la inversión privada en cuarenta y siete ciudades más pobladas del país se determinó que sólo diez ciudades se encontraban en el grupo de mayor atracción, de las cuales cinco pertenecen a la región centro norte-costera. Ciudades que ya son centros asiento de industrias y que cuentan con mayor cantidad y variedad de servicios y dotación de infraestructura. Ellas son: Valencia, Caracas, Maracay, Puerto Cabello y La Victoria.

Las otras ciudades, con valores próximos a las anteriores, son: Barquisimeto, en la región centro occidental; Barcelona-Puerto La Cruz, metrópolis regional del oriente y Maracaibo, metrópolis regional del occidente, todas tradicionales e importantes polos del país. A este grupo pertenece también Porlamar, en la isla de Margarita, centro turístico y comercial de la Venezuela caribeña. Finalmente, Ciudad Guayana, asiento de las industrias básicas, lo cual explica por sí mismo su inclusión en esta agrupación. (Rodríguez-Grille, J. M. 1999: 8)

La realización de este trabajo se ha visto limitada por varias circunstancias. Se trata de un período muy reciente y por lo tanto se carece de una perspectiva histórica suficiente para evaluar los acontecimientos, hechos y tendencias en forma objetiva y adecuada. Se trata de un lapso en que se han tomado decisiones y aplicado una serie de políticas, planes y acciones tanto generales como sectoriales, en algunos casos con escaso éxito. Algunas medidas han sido efímeras en su aplicación o han carecido de la continuidad necesaria, como para generar plenamente sus efectos. En más de una ocasión se ha actuado más con la urgencia de enfrentar la contingencia y la coyuntura que con la perspectiva de mediano y largo plazo.

Otra limitación se refiere, como se señaló antes, a la carencia de series de estadísticas regionalizadas o de información georeferenciada de planes y proyectos de alcance nacional o regional, tampoco se ha contado con estadística censal reciente que permita establecer comparaciones en el ámbito de los estados o regiones.

Finalmente, junto a las restricciones anotadas el objetivo de lograr una visión general de lo que estaría o ha venido sucediendo en las geoeconomías regionales obliga a un análisis envolvente y de conjunto, a realizar generalizaciones que, como siempre, conducen a obviar algunos hechos más específicos que en algunos casos pueden resultar relevantes. De allí que los planteamientos realizados, como se puntualizó al comienzo, no pretenden pasar más allá de unas reflexiones y deben tenerse como una primera aproximación al tema.

Los cambios derivados de la crisis habidos en las últimas décadas en las actividades económicas, interpenetrados en importante medida también por la globalización, habrían ido delineando un cambio en la configuración territorial de Venezuela. Y de continuar las tendencias esta transformación se hará mucho más nítida.

La globalización, como es sabido, si bien abre muchas posibilidades, también, cancela otras tantas. Muchas empresas se han visto obligadas a compartir, o bien las menos competitivas a dejar, sus espacios en el mercado a los bienes y servicios de otras igual o más competitivas, del país o del exterior. Esta pérdida, junto a las ya limitadas oportunidades impuestas por la recesión económica interna se traduciría, principalmente en las regiones menos favorecidas, en una declinación o estancamiento de sus geoeconomías.

De esta manera, por una parte, se estaría produciendo un desplazamiento de mano de obra agrícola tanto por los momentos de acentuación de la crisis en el sector como por mejoras en la eficiencia de las exploraciones, lo que hace presumir un relativo despoblamiento de las áreas rurales y un crecimiento de la población eventualmente de los centros urbanos y ciudades de tamaño medio.

La inversión petrolera tanto de PDVSA como la captada por las diferentes modalidades de la *apertura*, especialmente en áreas diferentes a las ya en explotación, ha tenido impactos territoriales importantes. Como es sabido los establecimientos petroleros, por lo general, generan escasos encadenamientos económicos locales y regionales. Los insumos industriales y los suministros son, por lo general, de origen extraregional o provienen del exterior; algo similar acontece con la mano de obra semi o especializada. No obstante, esta actividad, especialmente los nuevos desarrollos, están movilizando contingentes de mano de obra tanto en la etapa de construcción de la infraestructura y establecimientos como en la de puesta en marcha de las nuevas unidades de producción. Esta población venida mayoritariamente desde distintos lugares ocupará los puestos en el empleo directo e indirecto. Si bien el empleo directo generado en este sector proporcionalmente es pequeño en el ámbito nacional no resulta lo mismo en el ámbito regional y principalmente en el local. De este modo, ya se están generando importantes impactos (tanto positivos como negativos), principalmente en municipios con poblaciones pequeñas, donde se han localizado nuevos establecimientos o ampliado la escala de los ya existentes.

En otro plano, las posibilidades que este sector abre para las industrias aguas arriba, son enormes y podrían reforzar y estimular al resto del sector industrial disminuyendo o eliminando la contracción derivada de la crisis económica; contribuyendo a dinamizar las economías urbanas donde tradicionalmente han tendido a ubicarse las industrias.

Las otras actividades industriales, a su vez, sometidas a una competencia más intensa, aún recuperando los niveles de producción de sus mejores tiempos, seguramente tenderán a absorber mano de obra en menor proporción que antes, la cual de no ser incorporada por otras actividades, podría incrementar los sectores de pobreza urbana.

No obstante, el desarrollo de las actividades económicas de las principales ciudades del país presenta mayores perspectivas derivadas, no tanto de la implantación de nuevas industrias o de la reactivación de las ya existentes sino más bien por estar ubicadas en ellas las sedes principales o la alta gerencia de las más importantes corporaciones y empresas más dinámicas del país. Situación que se ve reforzada por el desarrollo de las empresas que prestan servicios a las actividades productivas y evidentemente por el sector de las telecomunicaciones e informática que resulta hoy imprescindible para entrelazar las sedes centrales de las corporaciones y empresas y los establecimientos productivos propiamente tales.

Visualizando todo esto en la perspectiva de las geoeconomías regionales se puede puntualizar que: los territorios del estado Anzoátegui, estarían recibiendo uno de los impactos más fuertes por la conjunción de la actividad petrolera, resurgimiento industrial y de la actividad agrícola, junto al incremento de la actividad turística.

Del mismo modo, los territorios del estado Zulia, pueden verse afectados favorablemente tanto por la reactivación de los campos petrolero maduros y el desarrollo de la petroquímica como por el potencial que presenta la actividad agrícola en ese estado-región. Similar situación presentarían los territorios del estado Monagas.

La ventaja histórica alcanzada por los territorios de la región centro norte–costera (Distrito Capital y los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Vargas), le proporciona grandes posibilidades en cuanto a la reactivación industrial y enormes ventajas comparativas, entre otras razones, por encontrarse allí tres de las ciudades principales del país y dos de los puertos marítimos más importantes.

Finalmente, la reactivación de la actividad turística, estimulada con algunas inversiones extranjeras en el sector, está significando reforzamiento de las áreas con mejores condiciones para dicha actividad, de este modo se verán beneficiadas importantes franjas costeras en el nororiente del país, en la Isla de Margarita, en la costa oriental del estado Falcón y en menor medida el turismo de aventura hacia la gran Sabana.

Todas estas circunstancias, hechos y tendencias de cambio se enmarcan y concatenan, en alto grado, con la mayor autonomía de las regiones, derivada del proceso de descentralización iniciado en 1989. En este contexto, en la última década se ha desarrollado una pugna, entre muchas entidades federales (estados), incluyendo también algunos municipios, por captar la esquiwa inversión nacional o extranjera. Este hecho se ha revelado también en la competencia por ganarse, vía proyectos, los recursos financieros de las instituciones y mecanismos que se han creado para fomentar la descentralización. En esta competición nuevamente parecen haber salido favorecidas las entidades con más recursos técnicos y económicos, así como aquellas que han desarrollado una mayor capacidad de negociación.

En síntesis, las regiones de Venezuela se vienen debatiendo entre cómo encarar los retos y oportunidades de la globalización y cómo enfrentar y atenuar los efectos de la crisis económica, la que, en más de un sentido, no es sino el *lado oscuro* de la misma globalización.

NOTAS Y REFERENCIAS

- ^{1/} Con relación a lo nuevo y lo viejo de la globalización ver: A. Borón 1999
- ^{2/} Véase: Fernando Mires. 2000. P. 23 y sig.
- ^{3/} La periodización, así como la caracterización de cada fase se hacen de acuerdo a lo planteado por Omar Bello Rodríguez, 1999. También se han tomado algunos planteamientos de; Jesús Sanoja Hernández, 1999; D. F. Maza Zabala. 1999; M.I. Purroy, 1997 y L.P. España, 1997.
- ^{4/} Al respecto véase Asdrúbal Baptista, 1999b.
- ^{5/} Véase: Jonathan Coles W. 1997.
- ^{6/} Comunicación verbal de la Geógrafa Luisa Molina, 10/00.
- ^{7/} Datos obtenidos del Sitio Web de PDVSA. Otra información facilitada gentilmente por el grupo de investigación Agenda Petróleo del Instituto de Geografía.
- ^{8/} Faja petrolífera del Orinoco, es una franja ubicada al sur de los estados Anzoátegui, Monagas y Guárico y que bordea la rivera norte del río Orinoco, donde se encuentran enormes depósitos que contienen 1,2 billones de barriles de crudo pesado, extrapesado y bitumen, de los cuales cerca de un 23 % son económicamente explotables con la tecnología actualmente disponible.
- ^{9/} Datos obtenidos del Sitio Web de Oficina Central de Estadísticas y Censos (OCEI)
- ^{10/} Las estimaciones del PIB por estados y regiones para 1990 han sido calculados a partir de los datos aportados por: Héctor Valecillos. 1998.

BIBLIOGRAFÍA

- BAPTISTA, Asdrúbal. 1999a. *1996 Anno Horribilis*. **Economía Hoy**. 28/05/99: 34-35. Edición 10º Aniversario.
- BAPTISTA, Asdrúbal. 1999b. *Inversión privada y renta del petróleo*. **SIC**. (618):346-349.
- BELLO RODRÍGUEZ, Omar. 1994. *Motivos de una economía rezagada*. **Economía Hoy**. 28/05/99:11-13. Edición 10º Aniversario.
- BORON, Atilio. 1999. Pensamiento único y resignación política. Los límites de una falsa coartada. **Nueva Sociedad**. (163):139-151.
- COLES W. Jonathan. 1997. *El desarrollo agrícola Venezolano*. **SIC**. (600): 548-555.
- CUAURO, Lisbeth. 1999. *Telecomunicaciones: a pesar de la crisis un gran negocio*. **Economía Hoy**. 28/05/99: 59. Edición 10º Aniversario.
- EPINASA, Ramón. 1997. *Evolución de la política petrolera nacional*. **SIC** (600): 536-540.
- ESPAÑA N. Luis P. 1997. *Dos décadas de empobrecimiento y pobreza en Venezuela*. **SIC**. (600):480-483).
- FAJARDO, Víctor. 1986. *La Crisis económica y el proceso de ajuste en 1983*. **Cuadernos del CENDES**. (6):151-192.
- FRANCÉS, Antonio. 1996. *El petróleo: forjador del país y su cultura*. **Debates IESA**. (2) 2: 41-45.
- FRANCÉS, Antonio. 1997. *La Transformación industrial*. **SIC**. (600):542-543. Edición especial 60 años de **SIC**.
- HIDALGOV L. Erika. 1999. *Agro: muchos cambios pocos resultados*. **Economía Hoy**. : 28/05/99:53. Edición 10º Aniversario.
- MARTINEZ, Aníbal. 1999. **Diccionario del Petróleo Venezolano**. Colección Libros El Nacional, número 3.
- MAZA ZABALA, Domingo F. 1999. *Un decenio perdido y ganado: 1989-99*. **Economía Hoy** 28/05/99: 4-7. Edición 10º Aniversario.
- MIRES, Fernando. 2000. *Teoría Política del Nuevo Capitalismo o el Discurso de la Globalización*. Editorial Nueva Sociedad. Caracas.
- MUÑOZ L., Carlos A. 1990. **El Estado Venezolano y su Política Regional**. 1st ed. Universidad de Los Andes - Consejo Editorial, Mérida.

- MUÑOZ L., Carlos A. 1993. *Neoliberalismo e perspectivas das geoeconomias regionais*. En: Capuano S., F.; Santos, M.; De Souza, M.A. y Arroyo, M.; **Globalização e Espaço Latino-Americano**. Editora Hucitec. Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em planejamento urbano e regional. Sao Paulo. p. 78-91.
- OCEI-PNUD. 1999. **Índice y Entorno del Desarrollo Humano en Venezuela 1995-98**. Caracas.
- Purroy, Miguel I. 1997. *Sesenta años en busca de la diversificación*. **SIC**. (600):525-529.
- RODRÍGUEZ-GRILLE, José. 1996. *Las ciudades de Venezuela para la inversión privada*. **Provincia**. (2): 6-11.
- SANOJA HERNANDEZ, Jesús. 1999. *Tiempos de ajustes y desajustes (1989-1999)*. **Economía Hoy**. 28/05/99:28-29. Edición 10º Aniversario.
- VALECILLOS, Héctor. 1998. **Impactos Regionales del Crecimiento y la Contracción Económica en Venezuela 1936–1990**. Banco Central de Venezuela. Caracas.